

*Isabel Miranda de Wallace **

De una sociedad sin seguridad a una sociedad sin Estado: La diferencia entre reconstruir la seguridad y la razón de México

SUMARIO: I. Introducción. II. Situación actual. III. Las políticas ofertadas por el Gobierno. IV. Reflexiones finales. V. Conclusiones.

I. Introducción

El presente artículo tiene tres propósitos: dar una reseña desde el punto de vista ciudadano sobre la situación en que se encuentra México en cuanto a seguridad pública y participación ciudadana; proveer una opinión y crítica objetiva respecto de las políticas ofertadas por las autoridades en todos los poderes y órdenes de gobierno, refiriéndome específicamente a los temas en mención para dar una propuesta sobre su posible mejoría; y por último, proveer una serie de reflexiones que espero sirvan al lector como una fuente de motivación para crear (o fortalecer) su participación cívica.

* Presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro y activista en temas referentes a la seguridad pública y combate al crimen organizado. En 2005 sufrió en carne propia el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace, y desde entonces ha encabezado una cruzada con el objetivo de que los delinquentes responsables hagan frente a la autoridad y sociedad por muchos crímenes cometidos, además de evitar que dañen a otra familia al continuar en la calle cometiendo ilícitos. La Asociación Civil Alto al Secuestro tiene como objeto buscar que las víctimas de secuestro, tengan acceso a la justicia, y que sean los diferentes órganos de gobierno, que procuran e imparten justicia, respeten los derechos humanos. Entre las tareas a las que se dedica la Asociación, destacan el apoyo a víctimas para que sean canalizadas para recibir el tratamiento psicológico correspondiente, colaborar en la búsqueda de pruebas a favor del ofendido del delito y vigilar el actuar de las autoridades locales y federales, desde que éstas tengan conocimiento de la existencia de un secuestro, hasta la ejecución de las penas que se lleven a cabo en los centros de readaptación social con el fin de que se imparta una verdadera justicia.

Por lo anterior, el lector debe saber de antemano que este texto carece de rigor técnico o teórico, ya que más que ser una aportación a la literatura relevante de la materia, la verdadera intención es dar voz al sentir compartido por cientos de ciudadanos y víctimas con quienes he estado en contacto después de casi seis años de activismo.

México, sin lugar a dudas, se encuentra en un punto crítico en su historia. Las decisiones tomadas por la presente generación de políticos, burócratas, jueces, medios de comunicación y la sociedad civil, serán las que marcarán el camino hacia donde nos dirigiremos como país. En una frase: nos encontramos en un punto de inflexión y debemos decidir entre explotar al máximo nuestras capacidades y convertirnos en un país justo, seguro y próspero, u optar por atestiguar como el Estado mexicano se desmorona entre nuestras manos.

Parecieran antagónicos los escenarios que planteo. Sin embargo, si miramos con detenimiento a nuestra sociedad, nos daremos cuenta que esta puede y debe salir adelante. Nunca en nuestra historia México había tenido un *boom* demográfico como el que se experimenta en la actualidad. De la misma forma, los jóvenes de ahora cuentan con más años de educación en comparación con el promedio observado en generaciones anteriores. Asimismo, los mexicanos actualmente contamos con una mayor esperanza de vida que nuestros padres, y probablemente con mejores servicios de salud.

Sin embargo, si actualmente somos relativamente más sanos y educados, ¿por qué los problemas profundos de nuestro país parecen no tener fin? ¿No sería lógico pensar que con mayor educación México debería ser menos corrupto que en el pasado? ¿No sería un cambio natural que con mano de obra abundante y mejor preparada, México experimentara un momento de prosperidad económica? La falta de seguridad pública es probablemente el mayor problema al que nos enfrentamos actualmente. Al no tener un escenario saludable para la inversión económica, el desarrollo óptimo de los jóvenes, y por ende, para aprovechar nuestras ventajas como país, el estancamiento económico y social que vivimos es el resultado de los vicios que hemos dejado crecer. Es más, me atrevería a decir que sin seguridad, el mismo concepto de Estado se tambalea. En sistemas políticos obsoletos como el feudalismo, los siervos estaban dispuestos a ceder prácticamente cualquier libertad y derecho a cambio de la protección del Estado, representado en el señor feudal. La razón era bastante lógica, sin seguridad, lo más preciado que se tiene estaba en gran riesgo de perderse: la vida. Asimismo, en un pensamiento político mucho más reciente (y al mismo tiempo antiguo), teóricos del Estado como Rosseau y Hobbes nos planteaban que el ciudadano *debe* pactar un Contrato Social con el Estado. A cambio de ceder libertades y depositar su confianza en un ente autónomo (Gobierno), el ciudadano *recibe* a cambio un aparato

que va a resolver controversias e impartir justicia, proveer bienes públicos (seguridad pública, por ejemplo) y procurar el bienestar de sus habitantes. En este orden de ideas, ¿el Estado mexicano (y por Estado incluyo a la sociedad civil como parte del componente “población”) está cumpliendo su obligación de proveer bienes públicos de calidad, en especial el más básico que es la seguridad pública? ¿No al incumplir con esta obligación básica nuestro Estado está propiciando una división entre la población y el Gobierno?

Existen muchas razones que podríamos pensar para dar una explicación al estancamiento que percibimos en términos económicos, políticos y sociales, con respecto a los países industrializados y otras economías emergentes. Por esto mismo, solamente abordaré las razones con las que empíricamente he tenido contacto: la apatía ciudadana y la ineficiencia del Gobierno (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel local y federal), que ha sido rebasado en su capacidad de proveer a su población con elementos mínimos de seguridad pública.

II. Situación actual

Podría afirmar, casi sin temor a equivocarme, que México se comporta como una sociedad dividida. Sin razón aparente, nuestro país entró en una espiral de polarización social. En los ejemplos clásicos de sociedad dividida, se pueden observar patrones históricos de conflictos étnicos a causa de raza, religión o idioma. Sin embargo, en México a pesar de ser étnicamente una sociedad bastante homogénea, la división se ha infiltrado entre los mexicanos a un punto en el que los ciudadanos hemos dejado de tendernos la mano unos con otros. De la misma forma, el Gobierno ha optado por alienarse y actuar como un ente apartado del ciudadano, al que ve a la distancia, pero que difícilmente integra en su actuar del día a día. Lo anterior, es aún más claro en el Poder Judicial, donde la impartición de justicia resulta un misterio para el ciudadano común y corriente. Es relativamente sencillo quejarse de nuestro representante ante el Congreso local o el Congreso de la Unión, o al representante del Poder Ejecutivo de nuestra localidad o a nivel federal. Sin embargo, ¿de qué manera un ciudadano puede exigirle cuentas y transparencia a un juez que no conoce, que no fue electo por él, y al que es casi imposible tener acceso?

Pareciera ser que en México una relación que por naturaleza debería ser estrecha y solidaria en este momento se encuentra totalmente destruida. Por un lado, el Gobierno ha optado por aislarse, tratando al ciudadano como un expediente, un número de queja, un beneficiario, o incluso, un problema más. En el otro lado, encontramos a ciudadanos desencantados y escépticos del Gobierno, tantas veces defraudados que los incentivos para exigir cuentas,

transparencia o cooperar con las autoridades prácticamente han desaparecido. ¿No debería saber el burócrata que el ciudadano es su única razón de ser y que gracias a este último, cuenta con un trabajo? ¿No debería saber de igual forma el ciudadano que sin su participación no serán los mejores mexicanos los que nos gobiernen? ¿No debería ser una obligación moral y cívica asegurarse de que la persona en la que se deposita nuestra confianza tenga valores cívicos, al igual que las credenciales técnicas y profesionales para llevar a cabo un trabajo en el que representa a miles de ciudadanos?

Yendo un paso más lejos, ¿los políticos, (en los cuales ya no nos sentimos representados), para qué quieren ser gobernantes? Si bien pareciera una pregunta relativamente fácil, la evidencia nos muestra que la respuesta no es tan sencilla. Si analizamos el discurso generalizado, el 99% de los políticos responderían que aspiran a gobernar en pro del bienestar social, del bien común, del desarrollo nacional o similar. Sin embargo, en la práctica pareciera que todo se desenvuelve al revés: en las cámaras, locales y federales, existen fuertes incentivos a no cooperar con el Gobierno en turno, para desacreditarlo, bloquearlo y asumir un rol y discurso que se basa en que con la esperanza de la alternancia, todos los problemas se resuelven. Lo que yo he observado, es que la alternancia por sí sola, en ningún caso resuelve los problemas de raíz. Sin embargo, lo que sí se ve, es que el partido, grupo o coalición que logra la alternancia, por lo general recibe un Gobierno con fuertes vicios, desorganizado, financieramente endeble, y todo esto, consecuencia de sus bloqueos, desacreditación y golpeteo de cuando el nuevo gobernante, aun era oposición. En resumen, se destruye previamente el Gobierno que se espera ocupar, debilitando intrínsecamente al Estado mismo.

Estoy convencida que la alternancia o la conservación del poder por el Gobierno en turno, en todos los niveles y de cualquier partido, tendrá resultados muy similares, si no existe la cooperación entre los líderes políticos y sociales. En efecto, la alternancia es positiva para evitar los compadrazgos y mafias en el poder, pero sin el rompimiento estructural de estas mafias, no habrá cambio. Sin embargo, no podemos esperar que los problemas se resuelvan automáticamente con uno u otro partido. Estoy convencida, que gobierne quien gobierne, se avanzará en muy poco, si no logramos ponernos de acuerdo como nación. Necesitamos un país de pactos, un país de ciudadanos y gobernantes honestos. Actualmente, existen incentivos perversos en el sistema político para poder llegar a los consensos, al trabajo eficiente y a la crítica constructiva entre los gobernantes y los líderes de oposición. De allí mi pregunta sobre ¿para qué quieren los políticos el Gobierno?, si por lo general reciben únicamente los problemas que ellos mismos crearon. Y lo peor, el problema de fondo no es ese. ¡Buena fuera que todo terminara en disputas políticas! El verdadero problema, y que es el que nos afecta a los ciudadanos directamente,

es que al no haber un espacio para los consensos, y al bloquear el poco trabajo que generan los gobernantes, esto se traduce en menor crecimiento económico, menos seguridad, mayores incentivos para participar en el crimen y mayor impunidad, esto sin tomar en cuenta el mal empleo de los recursos económicos.

Lo anterior no va a cambiar por sí solo en las condiciones actuales. Por un lado, tenemos un sistema político controlado por políticos, no por la ciudadanía, que no están dispuestos a romper el status quo. Por el otro lado, tenemos ciudadanos apáticos que han perdido la ilusión en su participación social. Así pues, como yo lo veo, es como si estuviéramos en un coche atascado en lodo: no importa con cuanto fervor se muevan las llantas, el coche se seguirá metiendo más y más en el lodo, si no existe un trabajo en equipo.

Específicamente en el tema referente a la seguridad, esta distancia cada vez más visible entre el Gobierno y la ciudadanía, e incluso la misma división entre los ciudadanos, ha contribuido para que México sea un escenario propenso a ser afectado por la delincuencia, porque además de todo lo antes descrito, hay un gran debilitamiento INSTITUCIONAL y casi una nula responsabilidad y actuar de los diferentes Gobiernos. Entre menos cohesionados estemos los ciudadanos, menos confiemos en las autoridades para que éstas realicen un trabajo eficiente, y entre menos denunciemos los crímenes de los que somos víctimas o testigos, entonces el área de oportunidad que percibe el crimen organizado se acrecienta. De esta forma, la sociedad es numerosa, en general apática y desorganizada. El Gobierno se encuentra dividido en tres poderes independientes y en ocasiones en disputa, lo que hace que la coordinación en su actuar sea particularmente ineficiente en el tema de seguridad pública. El ejemplo claro se encuentra en el nivel de impunidad que vive nuestro país. Por un lado, el Poder Ejecutivo (procuradurías estatales y federal) se queja de que tantos criminales consigna ante el Poder Judicial, estos son rápidamente liberados. Por el otro lado, el Poder Judicial (en general) se queja de lo mal integrado que está el expediente acusatorio realizado por el Ejecutivo. Por último los dos poderes anteriores también le comparten un poco de culpa de su ineficiencia al hecho de que las leyes enviadas por el Legislativo tienen vicios de origen. En suma, los poderes, por su misma naturaleza, tienden a hacer más complejo el proceso de impartición y administración de justicia. Sin embargo, el ciudadano espera que el Gobierno en el que depositó su confianza, al que le paga impuestos y al que le ha cedido una parte de su libertad, haga un trabajo eficiente, es decir, que los engranes entre los poderes (e incluso al interior de los mismos poderes) trabajen perfectamente para que la política recibida sea de la mejor calidad.

Tristemente, las políticas que recibimos en la materia ya no se puede decir que son de buena calidad en ningún estándar, al punto que incluso nuestros derechos más básicos son violados. Desde mi punto de vista, el derecho a la vida y

en especial la libertad son derechos humanos vulnerados y burlados constantemente en México. Abraham Lincoln alguna vez dijo que la palabra libertad es la única en la que todas las definiciones estarían incompletas. Sin embargo, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición dice así: “La libertad es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres”.

Es decir, mientras un país no esté bien gobernado, no importarán las leyes ni sus costumbres, ya que no habrá condiciones para que exista la libertad. En el caso de nuestro país, donde la mayoría de las encuestas de victimización muestran un índice de impunidad mayor al 95% de los delitos; donde todas las encuestas elaboradas entre la ciudadanía dan una calificación reprobatoria a los legisladores; donde existe una desilusión en los partidos políticos, la cual se refleja en los altos índices de abstencionismo; y donde existe un miedo generalizado a salir a la calle por la posibilidad de ser víctima del delito; entonces podemos concluir que nuestro Estado está fallando.

De esta forma puedo afirmar, que en México la libertad existe sólo parcialmente, y que los ciudadanos, día con día, solapamos que este derecho humano nos sea violado. Si no podemos salir a las calles, sin miedo, sin paranoia, confiados en que regresaremos a casa sanos y salvos, la libertad solamente será una hermosa palabra en nuestras leyes; será únicamente a lo que esperamos llegar como nación; pero definitivamente, no es lo que se observa en la realidad.

Para lograr que México sea un país libre, es claro que necesitamos mejores Gobiernos; es más, me atrevo a decir que necesitamos mejores ciudadanos. Así pues, ¿de qué forma hacer que el Gobierno recupere la confianza del ciudadano y al mismo tiempo que el ciudadano participe activamente con sus comunidades y gobernantes? Es evidente que en la actualidad la desilusión que se vive en la política, impartidores de justicia y representantes populares actúa como una fuerza centrífuga que separa al ciudadano de su Gobierno: entre menos eficiente sea el Gobierno, el ciudadano se desilusiona más y tiene menos incentivos a cooperar con él, lo que a su vez hace que las políticas del Gobierno no sean tan eficientes como se plantearon originalmente, lo que crea aún más desilusión y así continúa este círculo vicioso de desilusión-distanciamiento.

En este sentido, ¿es culpa de los políticos prometer más de lo que pueden cumplir? ¿Es culpa del ciudadano creer e ilusionarse con un nuevo Gobierno cuando en el fondo sabe que lo que se le prometió es virtualmente imposible de lograr? ¿O es culpa del sistema político en el que nos desenvolvemos que orilla a los políticos a crear falsas esperanzas en la ciudadanía?

México necesita pactar un nuevo Contrato Social. Sin éste, seguirán habiendo incentivos para que los políticos prometan en campaña más de lo

que saben que es posible; que los burócratas cuenten con una *zona de confort* donde saben que difícilmente perderán su empleo sin importar el resultado que den, creando un círculo vicioso en el que los ciudadanos cada vez confiarán menos en ellos y estarán menos dispuestos a cooperar con las autoridades, mermando sin duda el resultado de su actuar.

Si queremos que México actualmente aproveche sus oportunidades y explote su potencial, nos guste o no, tenemos que trabajar conjuntamente políticos, burócratas, jueces, medios de comunicación y sociedad civil. Con lo anterior no es mi intención desafiar la división de poderes ni la autonomía del Estado, sino es introducir a la discusión el hecho de que todos los actores deben de tener los incentivos necesarios para que podamos tener un proyecto común como país, ya que de cualquier otra forma, los esfuerzos independientes de cualquiera de nosotros difícilmente tendrán un impacto a gran escala en nuestra sociedad.

III. Las políticas ofertadas por el Gobierno

Las políticas implementadas por el Gobierno mexicano en cuanto a seguridad se pueden agrupar en tres grandes bloques: prevención (política social, económica y educativa), inhibición (vigilancia/patrullaje) y contención (administración e implementación de justicia).

En cuanto a la prevención, la política social desde mi punto de vista es concebida como una rama de la política no relacionada con la seguridad, pero que tiene externalidades positivas en ésta. Es decir, cuando los tomadores de decisiones construyen, implementan y evalúan la política social de nuestro país, no tienen como un objetivo contribuir a la seguridad de nuestro país. Visiblemente la reducción de la pobreza y la desigualdad, la creación de empleos, el incremento en los años de estudio promedio de la población y el abatimiento de las tasas de analfabetismo tienen un impacto en la seguridad por la simple lógica de que una persona con más estudios, un mejor empleo y con menos necesidad de delinquir, va a delinquir menos. Sin embargo, lo que se está dejando de lado al construir la política social, económica y educativa en México, es fortalecer el fomento de la cohesión social. Ejemplos claros son la necesidad de la recuperación de los espacios públicos para el sano esparcimiento de la juventud, lejos del crimen y los vicios, la falta de atención de materias como civismo y ética en la formación básica (que incluso se eliminó del plan de estudios durante varios años) y una política que privilegie el desarrollo económico y no solamente el crecimiento, y reduzca la desigualdad socioeconómica en nuestro país. Seguramente el

México que nos tocó vivir es ligeramente más rico que el de la generación anterior, sin embargo si la brecha entre los más adinerados y los menos favorecidos es tan clara como la que vivimos, en vez de dotar de incentivos para trabajar más duro y luchar por la superación, se crea rencor social en una parte de la población, lo que la hace más propensa a robar, secuestrar o adentrarse en las filas del narcotráfico.

En cuanto a la política de inhibición, por su misma naturaleza federal, México cuenta con policías municipales, estatales y federal, todas con distintas responsabilidades y atribuciones. Como es sabido, en prácticamente todas las encuestas realizadas entre la ciudadanía, las policías (en general) no cuentan con la confianza del ciudadano al ser percibidas como corruptas, ineficientes y mal preparadas. En este punto, debo destacar el esfuerzo que se ha realizado por el Gobierno (en sus tres órdenes) para realizar exámenes de confianza entre las corporaciones policiacas con el objetivo de disminuir la corrupción y así ganar la confianza del ciudadano. Así, a pesar de los esfuerzos que se han realizado en esta materia, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la preparación y eficiencia de los cuerpos policiacos. Sin embargo, si analizamos con un poco más de detenimiento, nos daremos cuenta que somos víctimas de los mismos vicios de los que ya he hecho mención. Los salarios ofrecidos a los policías (en su mayoría) son ridículamente bajos. Si los salarios son bajos, entonces solamente serán atractivos para la población menos preparada. De esta forma (con el riesgo de generalizar en exceso), se está reclutando no a los mejores perfiles con vocación policial, sino a aquellos que están dispuestos a recibir ese pago. Con un salario bajo y una sociedad desigual y no cohesionada, el incentivo a caer en las trampas de la corrupción es muy grande.

Por último, la administración, procuración e impartición de justicia en México es un tema que la mayoría de los mexicanos no encuentra fácil de entender, con el que prefiere no involucrarse, sobre el que no le quedan muy claras sus facultades y limitaciones. Sin embargo, ¿no es en esta fase de la política de seguridad donde debemos asegurarnos que quienes han lastimado a la sociedad purguen un castigo proporcional a su daño? ¿No es justicia lo que queremos todos los mexicanos al momento de ser ciudadanos honestos? En ese sentido, una vez más las autoridades y el ciudadano se separan, ya que lo que se alcanza a ver desde la perspectiva ciudadana es un aparato lento, burocrático, que no ha logrado poner tras las rejas a los culpables de los crímenes que han golpeado a nuestra sociedad.

En suma, una política de seguridad comienza con la prevención, donde se reducen los incentivos para delinquir en la sociedad, a través de una educación integral en casa y escuela, con una política de desarrollo que reduzca la desigualdad entre la población y que promueva la integración y cohesión

de los ciudadanos entre sus comunidades. De esta forma, si la sociedad reduce los incentivos a delinquir, y esto a su vez es reforzado con una política eficiente de inhibición y contención de la delincuencia (es decir, vigilancia y eficiencia en la impartición de justicia), entonces se tendrá una política sólida en materia de seguridad. Desafortunadamente, lo que vemos en México es un país desigual, donde de acuerdo al Banco Mundial (2010) el 10% más rico de la población concentra el 43% de la riqueza nacional; donde la política social no fomenta la convivencia entre las comunidades y la política educativa no fortalece los valores cívicos desde temprana edad. De esta forma, si se percibe un alto incentivo a delinquir, y esto a su vez genera que el Gobierno tenga que perseguir más crímenes de los que puede darse abasto, entonces una vez más se entra en un círculo vicioso en el que el criminal sabe que entre más gente delinca, menor es la probabilidad de que reciba un castigo. Si a lo anterior le agregamos el ingrediente de la corrupción prevaeciente en México, se crea el escenario perfecto para que el Estado de derecho sea sistemáticamente vulnerado.

IV. Reflexiones finales

Desde la óptica de la asociación civil que presido, el primer paso a tomar debe ser invertir el sentido de la toma de decisiones en las políticas públicas. Actualmente el sistema se rige como un modelo *hacia abajo* en el que el Gobierno o unos pocos tomadores de decisiones eligen el camino a seguir en los temas de la agenda pública. Se debe cambiar el modelo hacia uno *hacia arriba* donde la sociedad civil empuje hacia los tomadores de decisiones las prioridades de la agenda pública. Sin este elemento, la sociedad nunca logrará hacer suyas las cruzadas públicas y las seguirá considerando el esfuerzo de alguien más por un interés particular.

Además, se necesita una política de Estado que propicie la participación ciudadana. Actualmente existen muy pocos instrumentos que fomenten la participación de la ciudadanía, y en su mayoría son de difícil acceso. Ejemplos claros de lo anterior, son las iniciativas populares y el referéndum, los cuales si bien existen jurídicamente, difícilmente los vemos operando en el día a día debido a la necesidad de cumplir con la cuota mínima de votos en las Cámaras o la cantidad de firmas necesarias para su presentación. Adicionalmente, no existe un sistema que revele las preferencias de los ciudadanos en cuanto se refiere al gasto público. Es necesario que la ciudadanía cuente con instrumentos jurídicos para tomar acciones concretas, como la Reforma Política, que incluya la revocación del mandato, entre otras.

Se requiere la regeneración y fortalecimiento del tejido social, para que las prioridades sociales puedan *subir* como una exigencia a las autoridades, y la sociedad debe de estar coordinada y solidarizada con la causa del otro. Mientras se sigan teniendo luchas individuales, la presión ejercida será mínima. Se debe entender que cada sector de la sociedad en su totalidad tiene impacto sobre los demás sectores. Como un elemento adicional, se necesita una comunicación eficiente entre los diferentes sectores de la sociedad. Si el mensaje nunca llega al otro, difícilmente se generará un vínculo de confianza que logre sensibilizar a la sociedad sobre la causa ajena. El crimen organizado ha tenido un escenario favorable para su expansión precisamente porque la sociedad se encuentra desorganizada. Es momento de volvernos a tender la mano unos con otros y proponer proyectos con objetivos comunes que recuperen la confianza entre vecinos y miembros de las comunidades.

Sin duda, la educación en casa es el arma más poderosa que se tiene para promover la recuperación del tejido social y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, ya que es allí donde se fomenta la honestidad, el trabajo, la responsabilidad y la tolerancia. Por más que los ciudadanos nos quejemos de lo corruptas e ineficientes que son las autoridades, debemos reconocer que somos nosotros quienes generamos el problema: si los ciudadanos no ofreciéramos *mordida*, no existirían servidores públicos a quienes corromper, si nosotros exigiéramos cuentas claras a nuestras autoridades, lo más probable es que éstos serían mejores y más profesionales, y si todos nos responsabilizáramos de nuestros actos, en vez de buscar salidas fáciles por nuestros errores, viviríamos en un país más justo y honesto.

Estoy convencida que si México logra transitar un cambio generacional con jóvenes mejor preparados, en un país más democrático y transparente, y cohesionados con sus comunidades, existen buenas posibilidades, no únicamente de fortalecer el Estado de derecho, sino de ir más allá y propiciar todos los cambios que nuestro país necesita.

En suma, la adopción de la cultura de la legalidad y el respeto irrestricto al Estado de derecho, con perspectiva de derechos humanos, es uno de los grandes retos pendientes que tiene nuestro país. Su implementación va más allá de mejorar los controles gubernamentales en la lucha anticorrupción, va mucho más allá de eliminar *huecos legales* o de castigar a quienes resulten culpables de un delito. La cultura de la legalidad implica un profundo cambio social, en el que la mentalidad de los mexicanos debe cambiar de manera radical para respetar y hacer cumplir la ley. Existen las condiciones para que las próximas generaciones tengan un mejor país, pero se necesita que rompamos los círculos viciosos de corrupción e ilegalidad, y los convirtamos en círculos virtuosos de apoyo, cooperación, respeto y responsabilidad.

V. Conclusiones

La sociedad mexicana se encuentra en un clima de apatía, falta de cohesión social y miedo a cambiar el status quo no solamente en temas de seguridad, sino en la gran mayoría de los temas de la agenda pública, donde no existe consenso ni interés por parte del ciudadano promedio. Adicionalmente, el sistema político no propicia la participación y la inclusión ciudadana en los temas de la agenda pública ya que la mayoría de las políticas tienen que pasar por un proceso de debate partidista donde los intereses ciudadanos no necesariamente cuentan con la máxima prioridad, mientras que el Poder Judicial se desempeña como un componente del Gobierno desapegado e insensible de las necesidades ciudadanas.

Así pues, una sociedad desarticulada y apática es mucho más vulnerable al crimen y a otros problemas como el estancamiento económico, ya que se destruyen los incentivos para proteger y cooperar con el otro. Reconstruir la seguridad y el tejido social son dos tareas pendientes indispensables para que el Estado mexicano no se convierta en un estado fallido. Definitivamente todos los integrantes de la sociedad mexicana, tanto clase política, como sociedad civil deben de fraguar un nuevo pacto social en el que todos tengamos incentivos a jugar en equipo. El objetivo es sensibilizar a todos, sobre la importancia de trabajar juntos, ciudadanos y gobernantes. Todos tenemos que ceder un poco y cambiar mucho; tenemos que ser mejores y trabajar hombro con hombro para que podamos ser libres; tenemos que impulsar una verdadera revolución ideológica, pacífica y ciudadana.

Adicionalmente, es necesario que el sistema político mexicano se reforme para que también haya incentivos a cooperar entre poderes, al interior de los mismos poderes, y entre partidos políticos rivales. Los expertos del tema seguramente tendrán una opinión mucho más profunda al respecto, pero en mi visión, no es posible que un Gobierno de coalición sea imposible de lograr en México. No solamente una coalición entre partidos políticos, sino con la sociedad civil como testigo y participante activo en la toma de decisiones de los temas más relevantes.

Por último, y no por eso menos importante, es necesario recalcar la importancia y el rol central que deben jugar los derechos humanos en nuestra visión de Estado. Simplemente sin ellos, cualquier Estado está destinado a fragmentarse. Sin duda muchos de los autores que hemos contribuido con esta publicación vislumbramos ese Estado ideal para México, donde vivamos seguros, donde seamos libres y en el que podamos explotar al máximo nuestras capacidades, para así triunfar y realizarnos como personas.

**II. El futuro de la política o la política del futuro:
El reto de recuperar el compromiso político
con la seguridad pública y el desarrollo sustentable**
